

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Diciembre 11 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por D. Julian Sobrino, ante el juzgado 1º de Distrito de esta Capital, contra los procedimientos del C. Juez 5º del ramo civil, en el juicio que le promovió D. Severino Comis, sobre pago de un crédito escriturario. Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; lo pedido por el C. Promotor fiscal; lo alegado por el quejoso; la sentencia del inferior y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente; se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propias consideraciones y legales fundamentos, la sentencia del juzgado 1º de Distrito, que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege al Dr. D. Julian Sobrino, contra los procedimientos del C. Juez 5º de lo civil en el juicio hipotecario que le promovió D. Severino Comis. Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.—Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*M. Aza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 17 de 1873.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor.

**AMPARO.**

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Matamoros, por Don Enrique Sanroman, contra el cobro que le hace la Aduana Marítima de ese puerto, del impuesto denominado derecho de bultos.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Enrique Sanroman, importó en los dias 6 y 7 del próximo pasado mes con los permisos número 8 y 19, tres cajas puros de la Habana y 40 sacos café del rio, y como la Administracion Marítima de este Puerto le exigiera el derecho de bultos, y por su resistencia le detuvieron una caja puros y dos sacos café, interpuesto el recurso de amparo y para sentenciarlo, ha corridosele traslado por tres dias que se vencen el dia de mañana.

Por el certificado de fojas 48, consta: que el Sr. Sanroman, pagó el derecho de bultos del efecto importado con el permiso número 8, y por consiguiente, el recurso queda reducido á lo practicado respecto del otro permiso número 19, y en esta inteligencia pasa adelante la Fiscalia.

La cuestion que ahora se agita, no es, si debió ó no cobrarse el derecho de bultos criado por la ley de 19 de Noviembre de 1867, mientras rigió el antiguo Arancel de 31 de Enero de 1856; sino si debe seguirse cobrando, desde que comenzó á observarse el nuevo arancel de 1º de Enero de 1872.

Aquella nó la toca ni tiene necesidad de examinarla la Promotoria, por que el derecho se cobró, y es ya hoy ese cobro un hecho consumado que no se reclama, por que el comercio se prestó á pagarlo cualquiera que fuese la razon de obediencia á una ley general esplicita que lo imponia, y que al hacerlo no estableció distincion alguna entre las Aduanas de la Zona y las que se

encontraban fuera de ella; y porque en cualquier sentido que la defendiera ó impugnara, no afecta ni conduce concluyentemente en manera alguna al punto de actualidad que se suscita y que ha motivado el acto que se reclama, en razón á que en ese entonces habia especificacion de derechos de importacion, y por consiguiente cabia el examen, de si el derecho de bultos que se imponian á los efectos importados, comprendia ó no á los que venian para consumirse en la Zona. Pero la controversia que ha ocasionado el recurso de amparo del Sr. Sanroman, de si debe ahora cobrarse ó no el derecho de bultos, tiene precision la Promotoria de tratarla legalmente, con la imparcialidad de su ministerio, con sujecion á las disposiciones legislativas vigentes, y en fiel desempeño de su obligacion que le compete de pedir por la Hacienda pública y Justicia federal, lo que la Constitucion y leyes fiscales y generales determinen.

La circular de 1º de Enero de 1872, dice literalmente: "dejarán por lo mismo de cobrarse separadamente, desde el 1º de Julio de 1872, los impuestos que sigén... derecho de un peso por bulto de ocho arrobas, en sustitucion de peages."

El arancel vigente del dia, mes y año citados, refunde los derechos de importacion en uno sólo consignado en su artículo 74.

La ley del presupuesto de ingresos para el año económico que comenzó el primero de Julio de 1872 y terminó el 30 de Junio de este año, en su artículo 1º no cuenta mas derecho de importaciones que los creados por el nuevo Arancel de 1872, y el 2º dice terminantemente: "quedan refundidos en el derecho de importacion único, que se cobrará en las Aduanas Marítimas, los impuestos siguientes que establecieron la ordenanza de Aduanas de 1856 y otras leyes: el derecho de un peso por bulto de ocho arrobas, en sustitucion de peages, 9 por ciento."

El artículo 2 de los transitorios del Arancel, reservó á una ley la determinacion de

lo que debia regir respecto de importacion y consumo de mercancías extranjeras en los lugares en que existe la Zona, conforme á la ley de 3 de Julio de 1861.

Esa ley determinativa no ha llegado á promulgarse, y la citada que estableció la Zona existente, concede por su artículo 1º, que los efectos extranjeros que se detienen al consumo de la Zona, sean libres de todos derechos, con escepcion de los municipales.

El artículo 214, transitorio del reglamento de 1º de Enero de 1872, dijo: que mientras se expedia esa ley reservada, "se observará por las Aduanas respectivas, las de la Zona, lo determinado en la ley de 30 de Julio de 1861, y en el reglamento del contrarresguardo de la frontera del Norte, de 4 de Junio de 1870, con las adiciones y modificaciones que se le han hecho con posterioridad." Es decir, el reglamento, segun lo acredita el pronombre *le* puesto en singular, y á que hace referencia á adiciones y modificaciones ya pasadas, y no á las que pudieron hacerse á la Zona ó al mismo reglamento.

El telégrama de la Aduana de 13 de Julio de 1872 al fin, fojas 51, y el de la misma oficina, de 3 de Setiembre, fojas 53, promovieron el cobro de derecho de bultos á los efectos importados para el consumo de la Zona, y el 24 del mismo mes de Setiembre de 1872, encontrándose el Gobierno revestido de las facultades que le habian sido concedidas el 31 de Mayo anterior, lo resolvió á la Aduana por el telégrama de fojas 52, que á las mercancías importadas con posterioridad al 30 de Junio, y que por lo mismo deben liquidarse con arreglo al nuevo Arancel, se les exigiera solo el derecho Municipal, en el acto de la importacion, cobrando el resto de los derechos hasta la internacion, segun lo dispuesto en el decreto de Zona libre.

El 16 de Octubre de 1872, terminaron las facultades que tenia el Gobierno desde el 3 de Mayo; y sin embargo, la Aduana en

su telégrama de 18 de Noviembre, fojas 50 y otros, siguió pretendiendo el cobro del derecho de buitos, hasta hacer que el Sr. Ministro, por telégrama de 4 de Diciembre fojas 9, le dijera: "Dispone el C. Presidente, que se cumpla exactamente la resolución dictada el 24 de de Setiembre, por no ser posible hacer otra cosa."

Después mediaron los telégramas que corren agregados, y los de que ha hecho mérito la Aduana Marítima de este Puerto en su informe; pero la Promotoría no declina á todos y cada uno de ellos, sino que se conserva en la posición legal que ha adoptado de invocar las disposiciones legislativas vigentes, y pedir su cumplimiento con entera sujeción á ellas.

Por tanto, y con mérito de las que quedan citadas y artículos 16 y 27 de la Constitución, somete á la aprobación de V., la siguiente proposición única:

La Justicia federal ampara y protege al C. Enrique Sanromán, contra el acto de la Aduana Marítima de este Puerto, que al importar para la Zona 40 sacos de café, del río, amparados con el permiso número 19, le exigía el derecho de buitos, y para su pago, le detuvo dos de esos sacos de café.

H. Matamoros, Julio 4 de 1878, á las tres y media de la tarde.—*Lic. Agustín Menchaca*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

H. Matamoros, Julio 17 de 1878.—Vistos los presentes autos, y en ellos, el escrito con que principian, en que el C. Español Enrique Sanromán, solicita el amparo de la Justicia federal, por creer violadas en su persona las garantías que la Constitución de la República le otorga en sus artículos 16 y 27, con el acto de haberle retenido el C. Administrador de la Aduana marítima de este Puerto, unas mercancías, para asegurar el pago de "Derecho de Bultos" que

le cobra en la importación de los efectos extranjeros clasificados á fojas primera, y cuyo pago resiste el quejoso por reputarlo ilegal y arbitrario; los informes rendidos por el funcionario de quien emanó el acto reclamado, con los justificantes á ellos adjuntos; lo espuesto por el Ministerio público al contestar el traslado que se le corrió, y el alegato de buena prueba de la parte actora.

Primero; considerando: que está vigente el decreto conocido con el nombre de "Zona libre," de 17 de Marzo de 1858, aprobado por el de 30 de Julio de 1861, del Congreso de la Union.

Segundo: Que entre las diversas pruebas que de ello pueden aducirse, ministra una de las mas irrecusables el novísimo Arancel de Aduanas marítimas y fronterizas de 1º de Enero de 1872, y otra su Reglamento de la misma fecha; el primero, por que dispone en su artículo segundo de los transitorios, que "una ley determinará lo que deba regir respecto de importación y consumo de mercancías, en los lugares en que actualmente existe la Zona libre, conforme á la ley de 30 de Julio de 1861;" y el segundo, mas esplicito aun, por que previene en su artículo 214 tambien transitorio único: que mientras se espide aquella ley, "se observará por las Aduanas respectivas lo determinado en la ley de 30 de Julio de 1861, y del el Reglamento de la Frontera en el Norte, de 4 de Julio de 1870, con las modificaciones que se le han hecho con posterioridad."

Tercero: Que aunque se haya pretendido decir que esta parte final del artículo antes transcrito, supone modificado el decreto de Zona, semejante interpretación es verdaderamente insostenible, como contraria á las reglas gramaticales, y opuesta á la realidad de los hechos: lo uno, porque aquel pronombre *de*, solo puede referirse á la palabra reglamento que antecede, y no abarcan tambien las anteriores de ley de Zona, puesto que para comprender las dos ideas, habria tenido que emplearse en la locucion

plural, de que no se usó; y lo otro, por que si existen y pueden citarse las modificaciones que el Reglamento ha sufrido, ninguna se puede señalar hasta hoy del Decreto mencionado, por no haberla.

Quarto: Que de lo espuesto fluyen las siguientes forzosas y exactas consecuencias: Primera: que el mismo legislador tiene solemnemente reconocido y declarada la vigencia sin restricciones, de ley de "Zona libre." Segundo: que con igual solemnidad ha prevenido en términos precisos é intargiversables que se observe, y espresamente, que se observe por los Administradores de las Aduanas respectivas. Tercera: que ha ordenado que dicha ley rija, interin no se expida la otra que para el futuro ofrece, y no ha sancionado todavia, y Cuarta: que al dejarla en todo su vigor, como la dejó, ella es la que debe consultarse para decidir el punto en cuestion.

Quinto: Que partiendo de esta base, desde el preámbulo que encabeza dicha ley se vé, que su objeto fué proteger al comercio de los pueblos de esta Frontera, concediéndole franquicias para levantarlos de la postracion en que se hallaban, con cuyo fin decreta: "Artículo primero: Los efectos extranjeros que se destinen al consumo de la Ciudad de Matamoras..... Reynosa, Camargo, Mier, Guerrero y Monterrey Laredo, y al comercio recíproco de esos mismos pueblos, serán libres de todos derechos, con escepcion de los Municipales...."

Sesto: Que habiéndoles otorgado tan extensa gracia, es quebrantarla, es ir contra la letra y el espíritu del privilegio, cobrar á esos efectos otros derechos que los Municipales, y por consiguiente, cobrarles el de bultos que no admite, y que ni se había siquiera establecido en la época en que se expidió la ley Zona.

Setimo: Que la Administración marítima confiesa en su informe de fojas 46, "ser cierto que le cobra al actor el Derecho de bultos, al importar sus efectos extranjeros mencionados, y ser cierto tambien, que para can-

cionar su pago, le retuvo parte de ellos," cuyo hecho no puede fundarse en aquella ley, con la que se opone abiertamente; escusándose la Aduana con decir, que al proceder de esta manera, obedece órdenes superiores, remitiéndose á las que en diversos telégramas le ha comunicado el Ministerio, y en copia exhibe.

Octavo: Que estos telégramas resuelven: el de fojas 19 datado el 24 de Setiembre de 1872, que no se cobre el derecho de bultos en el acto de la importacion á los efectos extranjeros que deban liquidarse conforme al novísimo arancel de 1872, sino los municipales solamente, y que el resto de los derechos que haya que pagar, se les cobre hasta la internacion, con arreglo á la ley de Zona Libre, repitiendo el de 4 de Diciembre que se cumpla exáctamente la anterior resolucion, por no ser posible otra cosa, segun consta á fojas 9.

Noveno: Que luego, en una larga serie de mensajes posteriores, ya decido el Ministerio que se cobre el cuestionado derecho, dando estas razones en el de 26 de Diciembre que se registra á fojas 12. Primera: que está refundido pero subsistente en el arancel de 1872. Segunda: que antes de hallarse éste vigente, ya se cobraba en la Zona. Tercera: que por lo mismo, mientras no se expida la ley reglamentaria de Zona Libre, es indudable el derecho para exigir ese impuesto, ordenando cuotizarlo á 409 milésimos por ciento, y que se deduzca á la internacion.

Décimo: Que el Juzgado meditando con imparcialidad, no ha podido conciliar aquellos telégramas con lo que las leyes actuales prescriben, porque de su estudio se desprenden las siguientes conclusiones contra ese cobro del derecho de bultos, como aquí se pretende hacerlo. Que no puede él basarse desde la vigencia del Arancel de 1872, ni en el de 1856, ni en el decreto de 20 de Noviembre de 1871, que estableció dicho impuesto, porque en el Arancel de 1872, se reunieron formando un solo cuer-

po, las varias determinaciones respecto del comercio extranjero diseminadas en diferentes leyes, como lo explica la circular que lo acompaña de 1º de Enero del citado año, en el núm. 15 de su párrafo 4º; y por lo mismo quedaron sin vigor las precedentes. Que ninguna Aduana puede hoy hacer figurar entre sus liquidaciones al comercio, partida especial por derecho de bultos, porque el artículo 15 del último Arancel determina: 'que las mercancías extranjeras pagarán por único derecho, las cuotas comprendidas en su artículo 18, y las no comprendidas en dichas tarifas, un 55 por ciento sobre su aforo. Siendo muy oportuno recordar aquí, que hablando de las bases que sirvieron para la formación del Arancel respecto del derecho de importación, ha dicho el legislador en el párrafo 11 de la propia circular, estas decisivas y textuales palabras "quedan refundidos en ese derecho y dejarán por lo mismo de cobrarse separadamente....VI Derecho de un peso por bulto de ocho arrobas en sustitución de peages.' Que en los pueblos de la Zona Libre, las Aduanas no deben exigir á la importación de esos efectos, ni las cuotas de las tarifas, ni el 55 por ciento sobre su aforo, sino solamente los derechos municipales, por hallarse bajo el amparo de una ley especial que así lo manda. Y que tampoco pueden hacer en dichos pueblos el expresado cobro en la importación, ni para deducirlo en la internación, sino infringiendo el artículo 7º de la misma ley particular, á donde previene: que al tiempo de salir los efectos extranjeros de los pueblos agraciados para internarse en la República, será cuando se causen los derechos que les están impuestos por los Aranceles.

Décimo primero: Que estas disposiciones no pueden tenerse como alteradas por lo que el Ministerio de Hacienda ha resuelto en sus posteriores telégramas, porque el Código civil prescribe en su 9º artículo, que la ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior. Que la de 20 de Enero de

1869, dispone en su artículo 28: que los Tribunales para fijar el derecho público, tendrían como regla suprema de conducta, la Constitución federal y las leyes que de ella emanan; y existe reconocido el principio jurídico, de que no basta que la ley sea obligatoria para todos, sino que además, es necesario que los Magistrados encargados de aplicar sus disposiciones á los casos que ocurran, no pueden jamás sustraerse al cumplimiento del mandato que se les ha confiado.

Décimo segundo: Y atendiendo por último, á que del informe de la Aduana, del documento de fojas 48, y de la tácita aprobación del actor que no lo niega, resulta que con posterioridad á su demanda, satisfizo espontáneamente el valor del derecho de bultos que se le cobraba por el permiso de importación núm. 8; por lo que solo pudo quedar viva su acción, por el que se refiere al resto de sus mercancías; de conformidad con el pedimento del Ministerio público, se declara: que la Justicia federal ampara al C. Español Enrique Sanroman, contra el acto de la Aduana marítima de este Puerto, que para asegurar el pago que separadamente le exige del derecho de bultos por el permiso de importación núm. 19, le retuvo parte de los efectos, resultando así violada la garantía que el Código de 1857 le concede en su artículo 16, á consecuencia de no aparecer fundada la causa legal del procedimiento.

Notifíquese esta sentencia; publíquese por los periódicos, y con su expediente, elévense en revisión.

Así definitivamente juzgando, lo proveí yo el Juez, y lo firme con los de asistencia. Doy fé.—*Manuel Mendiola*,—*Tomás Villareal*.—*Jesus Cavazos*.

*Ejecutoria de la Suprema Corte  
de Justicia.*

México, Noviembre 27 de 1873. —Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Matamoros, por D. Enrique Sanroman, contra el cobro que le hace la Aduana marítima de ese puerto del impuesto federal denominado derecho de bultos, por las mercancías que importó de Bronsvill en los días 6 y 7 del pasado Junio, reteniéndole para asegurar su pago, parte de los efectos importados, cuyo procedimiento viola en concepto del quejoso, las garantías que consigna la Constitución federal en sus artículos 16 y 27, pues que ha quedado suprimido el referido impuesto en todos los lugares comprendidos en la Zona libre, cual es Matamoros, en virtud de haber sido refundido en el derecho único de importación que establece el Arancel de Aduanas vigente, y del cual estan declarados libres los efectos extranjeros que se introducen para el consumo de la expresada Zona, y Considerando: Que el derecho de un peso por bulto de ocho arrobas, establecido en sustitucion del de peages, no fué suprimido por el mismo Arancel de Aduanas, sino que simplemente ha quedado refundido, como otros varios impuestos, en el derecho único de importación que estableció dicho Arancel, y bajo esta misma forma sigue recaudándose por las oficinas federales en la generalidad de los puertos de la República. Que el repetido derecho de bultos que hasta ahora habia sido satisfecho por todas las mercancías que se introducen á los lugares que gozan del beneficio de la Zona libre sin reclamacion de ninguna especie por parte de los importadores, debe seguir recaudándose en esos mismos puntos separadamente, y segun la manera que determina la ley de su creacion, por no ser aplicable ahí las reformas del Arancel de 72, sobre refundicion de los diversos derechos aduanales en una sola cuota. Que habiendo quedado subsistente el derecho de bultos, á pesar de las

TOMO V. PARTE II.

reformas introducidas por el mismo Arancel, la Aduana de Matamoros no ha hecho mas que cumplir con su deber, al exigir su pago y proceder al aseguramiento del interes fiscal, sin violar en nada las garantías constitucionales invocadas por el quejoso. Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta. Primero: Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito en 17 de Julio del presente año, que declara: que la Justicia federal ampara y protege al C. español Enrique Sanroman, contra el acto del Administrador de la Aduana de Matamoros, que para asegurar el pago que separadamente le exige del derecho de bultos por el permiso de importacion número 19, le retuvo parte de los efectos. Segundo: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Enrique Sanroman, contra el acto reclamado, por no haberse violado en él las garantías constitucionales que invoca el quejoso. Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*José María Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, 24 de Diciembre de 1873.—*Lic. Emilio Ordáz*, oficial mayor.